

C.A. de Santiago

Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con la salvedad que en el fundamento vigésimo noveno se sustituya la suma de “\$50.000.000” por la cantidad de “60.000.000, sesenta millones de pesos”.

Y se tiene, en su lugar y además presente:

Primero: Que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, así como por la transgresión de los artículos 1, 6 y 8 de la referida Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de la demandante de la presente causa, de acuerdo a los hechos tenidos por ciertos por la sentenciadora a quo.

Segundo: Que, por su parte, aun cuando se sostuviere que la acción civil deducida en estos antecedentes es prescriptible, resulta pertinente aplicar al caso concreto la institución de la renuncia a la prescripción, corresponde indicar que el artículo 2494 del Código Civil dispone “La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida”. “Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor;(…)”. Además, para que pueda determinarse su existencia se requiere que la intención de renunciar sea inequívoca, es decir, que se desprenda de un hecho que suponga necesariamente el abandono de un derecho adquirido a través de actos concretos del deudor. Al respecto se ha resuelto por la jurisprudencia que debe existir una manifestación de voluntad que sea realizada sin compensación alguna, por mera liberalidad o por moralidad, lo que debe desprenderse de los hechos en forma clara e incuestionable.

Tercero: Que de un atento examen de los antecedentes que obran en autos es posible colegir que con la publicación de la Ley N° 20.874, de fecha 29 de octubre de 2015, el Estado demandado ha reconocido su condición de deudor para con las víctimas de prisión política y tortura, constituyendo aquélla un acto de renuncia a la prescripción.

Cuarto: Que, en este mismo sentido, y a mayor abundamiento, cabe hacer presente el último acto relevante de reconocimiento expreso del Estado en esta materia. Es así como en la contestación que éste realizara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXMMXQHSPHM

contexto de la demanda que interpusieran en su contra en el caso “María Laura Órdenes Guerra y otros respecto de la República de Chile”, por la responsabilidad que le cabe al violar los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. En síntesis, y en lo que nos atañe, el Estado manifestó: “[...] su voluntad de aceptar las conclusiones y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan contenidas en el Informe de Fondo adoptado por la CIDH”. En particular, señala que faltó al derecho a las garantías judiciales por no determinar el derecho de las presuntas víctimas a obtener una reparación en el ámbito civil. Asimismo, la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las presuntas víctimas imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación y dificultó hacer uso adecuado del recurso que es idóneo para reparar violaciones a derechos humanos. En cuanto a las reparaciones, el Estado señaló: “al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada”. Así, “previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: En primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias” (...) “No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tornando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria (...).”



Quinto: Que lo anteriormente citado resulta ser una manifestación expresa e inequívoca del Estado de Chile de reconocimiento de la renuncia a la prescripción.

Sexto: Que, por otro lado, el daño moral puede ser conceptualizado como un perjuicio que se sufre como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito que, lesionando la persona o sus bienes, afecta los elementos psíquicos o espirituales que indican en el normal desarrollo del ser humano.

En términos amplios significaría un menoscabo afectivo, representado en un atentado a los valores o más largamente a los sentimientos de un individuo, en cuanto intereses tutelados por el derecho, que se produce con ocasión de la comisión de un hecho ilícito sobre su persona o bienes.

Séptimo: Que, el demandante es hijo del ejecutado político don Ricardo Cristian Silva Soto, quien fue asesinado por la Central Nacional de Informaciones el 15 de junio de 1987, a propósito de la llamada "*Operación Albania*", lo anterior con ocasión de las represalias emprendidas en 1987 por los agentes de la CNI en contra de diversos militantes de izquierda por el atentado al Presidente de la época, don Augusto Pinochet Ugarte, siendo don Ricardo Cristian Silva Soto ultimado *presentando diez heridas a bala, siendo la causa de su muerte los traumatismos faciales, cráneo encefálico, torácico, abdominal y de las extremidades superiores.*

Al respecto, la demandante rindió múltiple prueba, esencialmente documental y testimonial, destinada a avalar y justificar la pretensión incoada. En efecto, entre la prueba documental rendida, esa parte incorporó los siguientes elementos de convicción, a saber: **I.** Certificado de Nacimiento de Cristian Salvador Silva Soto; **II.** Copia del fallo Rol 39.122, Episodio "Operación Albania" dictado por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Hugo Dolmestch Urra de fecha 28 de enero de 2005; **III.** Copia del fallo Rol 11914-2005 de esta Corte de Apelaciones, de fecha 28 de diciembre de 2005; **IV.** Copia del fallo de Casación 1621-2006 con su correspondiente sentencia de reemplazo de la Excm. Corte Suprema, de fecha 28 de agosto de 2007; **V.** Certificado emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el que consta la calidad de víctima calificada de violaciones a los derechos humanos del señor Ricardo Cristian Silva Soto; **VI.** Copia de la sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, Rol de ingreso N° 8105-2018, de fecha 13 de junio de 2018, en que resuelve rechazar el recurso de casación en el fondo, intentado por el Consejo de Defensa del Estado, por adolecer de manifiesta falta de fundamentos (tanto la alegación de prescripción de la



acción como la alegación de preterición legal), consolidando (en consecuencia) la indemnización de \$70.000.000 (setenta millones de pesos) como resarcimiento del daño moral sufrido por la actora, hermana de un detenido desaparecido; **VII.** Copia de la sentencia de la Corte Interamericana de DD.HH, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, de fecha 29 de noviembre de 2018, la que declara que el Estado de Chile es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, por cuanto se aplicó, en el pasado, una figura procesal formal, como es la prescripción, en juicios de reparación por el daño moral ocasionado por violaciones masivas a los derechos humanos.

Octavo: Que, en cuanto a la prueba testimonial rendida por la parte demandante, depusieron en autos los testigos, don Roberto Alex Quintana Baltierra, ingeniero de alimentos; don Mauricio Eduardo Aliaga Torres, abogado, y don Christian Rafael Montenegro Lagos, gerente de tienda, quienes de manera preclara, mostraron mediante sus testimonios, la entidad del inmenso daño provocado al actor, detalles que solo pueden ser apreciados en la intimidad, que es mezcla de dolor y fraternidad en “el vacío del dolor”.

En consecuencia, la determinación del *quantum* debe apreciarse en conformidad con la posición de la víctima y con la naturaleza del daño, esto es, en atención al tipo de derecho agredido, a las consecuencias físicas y psíquicas de la persona, a la persistencia del sufrimiento y, por último, al principio de la integridad de la indemnización de perjuicios que se ordene a pagar.

En el caso *sublite*, se observa la concurrencia de elementos que nos permiten emplear los parámetros referidos, tales como, el haber permanecido durante largos años a la espera de justicia, ante las agresiones que agentes del Estado le causaron, circunstancia de hecho que devela el parámetro denominado “duración de la lesión”. También, es posible constatar la angustia, nostalgia, culpa y dolor, que reverberan en el fuero interno del actor, derivadas de tan cruento episodio de su historia familiar y nacional.

Es, asimismo, relevante constatar la concurrencia, en la especie, de otro parámetro jurisprudencial en materia de reparación del daño moral, denominado “circunstancias personales de la víctima”, las que fueron expuestas con antelación, además del razonamiento de la señora jueza a quo en los basamentos vigésimo octavo y vigésimo noveno del laudo refutado.



Por estas consideraciones, **SE CONFIRMA**, en lo apelado, la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol C-32824-2019, **CON DECLARACIÓN**, que se eleva la suma a indemnizar al actor por concepto de daño moral en sesenta millones de pesos -\$60.000.000- más los reajustes e intereses que establece la referida resolución.

Se previene que el ministro señor Ulloa, fue del parecer de elevar la suma a resarcir al demandante por concepto de daño moral, a la suma de ochenta millones de pesos (\$80.000.000).

Regístrese, comuníquese y devuélvase en su oportunidad.

Redactó el ministro señor Antonio Mauricio Ulloa Márquez.

N° Civil-19.033-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXMMXQHSPHM

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Antonio Ulloa M. y Abogada Integrante Claudia Candiani V. Santiago, catorce de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a catorce de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GXMMXQHSPHM